

DESIGUALDAD E INTOLERANCIA EN LA EVOLUCION POLITICA ESPAÑOLA (*)

Por JOSE CAZORLA

Durante los últimos cuatro siglos, dos características específicas han venido marcando singularmente la estructura social española: la desigualdad y la intolerancia. En mi opinión, ambas han constituido probablemente los principales factores de nuestros inacabables conflictos colectivos, en su mayoría violentos, por desgracia. En modo alguno pretendo que hayan sido su único origen o pertenezcan en exclusiva a nuestro país; pero sí creo que debe otorgárseles un papel extremadamente relevante, no solo en nuestra problemática histórica, sino incluso en la de nuestra esfera de influencia. No en vano ambas características fueron trasplantadas con más o menos éxito a nuestras colonizaciones u ocupaciones en Europa y Ultramar, en donde los pueblos autóctonos, pese a todas las leyes protectoras, fueron habitualmente tratados como súbditos de última clase, actitud ésta que desde luego tampoco nos es exclusiva.

Y decía así el Duque de Alba, sojuzgador de los Países Bajos: «Mucho más vale conservar por medio de la guerra, para Dios y para el Rey, un Reino empobrecido y hasta arruinado que, sin ella, mantenerlo íntegro para el demonio y para los herejes, sus satélites.» Opuesta a esa ideología, otra, hasta no hace mucho minoritaria, mantenía el principio contrario. Con estas palabras se expresaba Gonzalo de Valcárcel frente al de Alba: «¿Qué tiene que ver para que cesen allá las herejías que nosotros acá paguemos tributo de la harina? ¿Por ventura serán Francia, Flandes o Inglaterra más buenas

(*) El presente artículo reproduce en parte las tesis mantenidas por el autor en su discurso inaugural del II Congreso de Sociología celebrado en Santander (UIMP, septiembre de 1984), bajo el título general de *Conflicto y estructura social*.

cuanto España fuere más pobre?» Intolerancia y tolerancia enfrentadas en dos simples frases.

En la medida en que es fruto de la Historia y de las condiciones específicas de cada pueblo, *toda estructura social genera un tipo de conflictos que le es peculiar*. A mi parecer, en el caso de España nuestros conflictos han derivado en gran parte precisamente de la conjunción de la desigualdad y la intolerancia, y, como veremos, de ambas circunstancias subsiste aún una considerable proporción en nuestro tiempo. Pero su influencia en la Historia pasada, contribuye a explicar el que, en cada uno de los cuatro últimos siglos, hayamos sufrido una o más guerras civiles, caso único en Europa occidental, al menos de nuestras proporciones. Durante todo ese período, y cada vez con mayor frecuencia a medida que avanzaba el tiempo, la sumisión de unos y la caridad de los otros no eran en muchos casos más que los disfraces con que ambos encubrían un conflicto latente, que solo excepcionalmente alcanzaba a aflorar.

¿Qué clase de peculiar proceso histórico da lugar a la persistencia, hasta hace muy pocas décadas, de una estructura social cuya polarización desembocó en la penúltima y más sangrienta guerra civil de Europa occidental?

Para comprender el acelerado cambio sin precedentes que recientemente se ha producido en el país, y a la vez la subsistencia o la modificación de nuestros particulares factores de conflicto, se hace necesario observar con brevedad el decurso histórico relativamente más próximo a nosotros. Porque es bien cierto que la Historia constituye el más importante instrumento analítico explicativo singular de una estructura social en un momento concreto.

Ciertamente, como han señalado algunos autores, la unificación político-religiosa que fue fruto de la expulsión de moriscos y judíos y de la derrota de los Comuneros, contribuyó a la homogeneización del país y al reforzamiento del aparato del Estado, necesario para el gobierno del Imperio colonial. Pero ello se consiguió a costa de reprimir —entre otras— las legítimas peculiaridades político-culturales de una parte importante de España. No es menos cierto que, influenciado por tal homogeneidad, desde el siglo XVI el país inició una política de autoaislamiento, resultado además de su papel hegemónico mundial y de la intolerancia religiosa. La pérdida de ese protagonismo, que culmina en 1898, produce una actitud autocrítica, de frustración, de rechazo de nuestro propio papel en la Historia, que paradójicamente no abre nuestras puertas a las influencias culturales europeas, sino que las cierra más aún, con contadas excepciones, como en el caso de Ortega. El «que inventen ellos», es característico de esta continuación del aislamiento. Y el franquismo, más tarde, por obvias razones de control cultural, man-

tuvo la misma cerrazón. Tienen que llegar las circunstancias específicas de los años sesenta, para que comience el país a abrirse a influencias exteriores, como las que luego señalaré.

Por otro lado, la invasión napoleónica había dejado desorganizado durante algún tiempo el aparato del Estado, dando lugar además a una cierta pérdida de la tradicional legitimación de los gobernantes, ya que la defensa frente al francés no estuvo encabezada por éstos, sino que fue plenamente popular, espontánea. Es significativo así que no fuese el rey quien declarase la guerra al invasor, sino el alcalde de Móstoles. La resistencia de Fernando VII a aceptar las nuevas corrientes de la Historia, se unió a la incapacidad de sus sucesoras para prestar a la institución monárquica la dignidad que de ella se esperaba, lo que le restó legitimación, y constituyó un elemento más de inestabilidad. Estas circunstancias, junto a las violentas consecuencias de la pugna dinástica, contribuyeron a retrasar extraordinariamente la incorporación de España a las corrientes políticas y aun científicas que estaban influyendo en gran parte de Europa. Lo cual, obviamente, mantuvo, junto a los factores socioculturales antes mencionados, un clima de intolerancia que contrasta marcadamente con el predominante en el continente.

No se olvide que la Iglesia tendió a ser cada vez más conservadora, sobre todo desde mediados del siglo XIX, y la clase alta propendía a ser muy poco innovadora. De aquí que un conocido elemento que también pesó en nuestro retraso derivase de la alta proporción de nobleza y clero, todavía a comienzos de siglo, estimable en uno de cada siete habitantes, mientras las clases medias apenas llegaban a uno de cada diez. Los medios de producción se encontraban —inusitadamente incluso para la época— concentrados en muy pocas manos, y es bien sabido que la Desamortización no contribuyó a crear una capa de hacendados medios estabilizadora, sino que justamente aumentó la concentración de la propiedad agraria. Básicamente, había un eje de poder en Madrid y algunos incipientes núcleos burgueses en la periferia. La penetración y difusión misma de ideologías liberales y renovadoras se retrasó igualmente por causa de las identificaciones y rechazos subsiguientes a la invasión francesa.

El país se enfrenta pues con sucesivas guerras en su interior, y también en el exterior, con la emancipación de América, conflictos que no sólo mantienen un clima poco propicio a la convivencia pacífica, sino que confieren un papel preponderante al estamento militar en nuestra política. Este protagonismo se va a prolongar durante más de un siglo, conservadurizándose con rapidez y hurtando a la sociedad civil gran parte de lo que hubiese sido su normal evolución política.

Hacia 1840, los nuevos burgueses —comerciantes y fabricantes textiles

catalanes y propietarios mineros y metalúrgicos del Norte—, unidos a los latifundistas de Andalucía y Extremadura, llegan al que se ha denominado «pacto triangular», que sirve de nueva rémora a la necesaria transformación de la estructura española. Lo cual contribuye poderosamente al lento crecimiento de los sectores secundario y terciario, y en particular a la persistencia de actitudes retrógradas en la burguesía, que explican, por citar un solo ejemplo, el que la Ley de Accidentes de Trabajo sólo se promulgase ya en 1900.

Como ha señalado Garrorena, todavía en el censo de 1860 las clases medias no llegan al 20 por 100 del total de población, si bien nobleza y clero han disminuido considerablemente en número, tanto a efectos estadísticos como reales. En aquel momento, las tres cuartas partes de los habitantes del país son clasificables en el proletariado tradicional y rural, mientras el industrial es aún insignificante, con sólo un 2,5 por 100 aproximadamente.

Pero es que, además de ser poco numerosas las clases medias, su capacidad económica se encontraba a muy corta distancia de la de la clase trabajadora, por regla general. A menudo, sólo la diferenciaban de ésta no tanto los ingresos, cuanto la actividad, a la que se rodeaba de una aureola prestigiosa, intentado marcar las distancias con los estratos más altos de la clase obrera. Los conocidos tópicos de «las sufridas clases medias» tenían precisamente este origen, pero de hecho la diferencia en ellas entre *status* y clase era realmente considerable.

No se produce en España más que muy parcial y tardíamente un desarrollo industrial que permita un crecimiento de la clase media nueva y una consiguiente mejora de la posición económica de una masa importante de población. Únicamente en Cataluña y Euzkadi se origina un incremento económico e industrial en las últimas décadas del siglo XIX, que las hace despegar e impulsar en una parte de aquellas burguesías la expresión de sentimientos nacionalistas. Sentimientos reprimidos una y otra vez desde hacía siglos, y que se plantean con menor transigencia precisamente por partir de regiones ya más desarrolladas que el resto del país. No residía en ellas el poder político, pero sí buena parte del económico, y esa circunstancia, inédita en otros Estados europeos, exacerbaba más las expresiones del nacionalismo, y las primitivas manifestaciones del agravio comparativo, en particular frente al viejo centralismo.

Se produce simultáneamente un cierto crecimiento del proletariado industrial, incremento que continúa en las primeras décadas del siglo. Su planteamiento de reivindicaciones —no sólo salariales, sino con profundo contenido político— en los años 1917-19, alarma a la burguesía y termina por ser uno de los factores que propician la implantación de la primera Dictadura.

Una vez más, el sistema político quedaba muy atrás de la dinámica del sistema social. La tradicional estructura caciquil, y el desgaste de la farsa electoral, ya desde comienzos del siglo xx, resultaban impotentes para hacer frente a los nuevos factores de modernización. La solución que se adoptó, pues, fue la de ignorarlos y recurrir a una fórmula de fuerza, que al ser intolerante, reforzó como siempre la desigualdad.

El retraso del desarrollo industrial español, y su reducción a una parte muy limitada del territorio, coincidió por otro lado con un importante crecimiento demográfico, que tal desarrollo fue incapaz de absorber por completo. Y así, aunque la población rural —es decir, de localidades menores de 10.000 habitantes— disminuyó en términos relativos paulatinamente, desde los dos tercios de la total a comienzo de siglo, hasta ser hoy sólo una cuarta parte, en términos absolutos aumentó tanto en las tres primeras décadas, que ni la emigración al exterior, ni la demanda industrial interior pudieron absorberla. Este constituyó un nuevo factor de presión —dentro de la crisis económica de entonces— que alcanzó su punto álgido en los años 1934 a 1936.

Desde las primeras décadas del siglo se producía también en el país un fenómeno con escasos paralelismos en Europa occidental, y similar en cambio a lo que ocurre actualmente en ciertas zonas de Iberoamérica. Subsistía la desigualdad, no habían crecido mucho las clases medias, las oligarquías financiera y terrateniente mantenían su poder, pero a la vez se estaban debilitando los componentes ideológico-psicológicos que apuntalaban una sociedad predominantemente estamental, para crecer rápidamente los específicos de una sociedad clasista.

Lo que hasta entonces había sido conciencia de decadencia en nuestra cultura política, comienza a convertirse en conciencia de desigualdad. Dicho de otro modo: ya desde el siglo xviii, y sobre todo desde comienzos del xx, la melancólica y pesimista visión de nuestra decadencia como potencia mundial —a que antes aludí— procede sobre todo, cosa curiosa, de las clases gobernantes, responsables precisamente de ella, y no de los trabajadores, que al fin y a la postre eran quienes más la padecían. Esta conciencia iba unida a la de la diferencia con Europa, sobre el supuesto de que el nuestro era un país pobre —no un país empobrecido para beneficio de una minoría— y que, al ser pobre, sólo cabía adoptar una actitud fatalista y conformista con el destino. Habíamos perdido el Imperio y nuestro suelo ofrecía escasos recursos, mientras los demás, Francia, Inglaterra..., no sólo eran más ricos, sino que explotaban las riquezas de otros pueblos. De modo que sólo cabía conformarse.

En una parte creciente de la población, tan interesada y eficaz ideología

empezó a perder eficacia apaciguadora a medida que lentamente penetraban aquí otras corrientes de pensamiento, y la conciencia de decadencia terminó, como digo, por convertirse en conciencia de desigualdad, mal que pesara a la oligarquía gobernante.

Tal conciencia de desigualdad fue elemento característico de la mentalidad clasista, y, por tanto, una de las principales causas del fracaso de la II República, al enfrentarse con la mentalidad estamental, predominante en los sectores burgueses, que se apoyaban aún en la conciencia de decadencia. Al coincidir ambas sobre una estructura marcadamente desigual en términos objetivos, con grandes diferencias personales y geográficas de ingresos, altos índices de paro, y altas tasas de analfabetismo, se produjo una inevitable polarización, en dos grupos radical y mutuamente intolerantes, y, por tanto, estalló el conflicto violento. Puntas de lanza de uno y otro grupo fueron un capitalismo brutal y un revanchismo anarcoide, que actuaron en suma como motores de nuestra última guerra civil, arrastrando al resto de la población.

Aparte las abrumadoras consecuencias del choque abierto en los campos de batalla, en ambas retaguardias decenas de miles de españoles fueron entonces asesinados, no por sus hechos, sino por atribuírseles simplemente una ideología a la que sus contrarios intentaban erradicar. La intolerancia alcanzó así entre nosotros su máxima expresión histórica, hace tan sólo medio siglo. No es casual, en aquella circunstancia, que el nuestro fuese el último país occidental en que se enfrentaron en pugna directa fascismo y antifascismo.

La subsiguiente y triunfal hegemonía ideológico-económica del sector oligárquico sobre el resto de los ciudadanos, intentó forzar la pervivencia de una mentalidad estamental en su propio beneficio durante el máximo tiempo posible, alimentando para ello la xenofobia y la intolerancia hacia todo lo que no representase su particular sistema de valores. Naturalmente, se las utilizaba así como instrumento, el más eficaz, para el mantenimiento de la desigualdad.

Desde otro punto de vista, en los primeros ochenta años del siglo, la población propiamente urbana, es decir, de localidades con más de 100.000 habitantes, pasó del 9 por 100 al 42 por 100. Siendo evidente que lo rural y lo urbano no son meras adscripciones geográficas, sino todavía hoy formas diversas de vida, esta profunda transformación introdujo por sí sola consecuencias políticas cuyas connotaciones no han sido aún totalmente descritas, ni mucho menos analizadas.

Ahora bien, el crecimiento urbano no se produjo en forma equilibrada en modo alguno. La oferta de empleo secundario y terciario en las regiones

tradicionalmente más dinámicas, unida a la creación de un cinturón industrial en Madrid, desde comienzos de los años cincuenta, produjo una fuerte concentración demográfica en zonas tales como los alrededores de Barcelona, que llega a más de 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a municipios con menos de 100, como muchos gallegos.

Tan desequilibrado crecimiento se vio propiciado por los detentadores del poder, especialmente desde finales de los cincuenta, bajo el supuesto de que el «desarrollo» de las regiones prósperas actuaría de motor de las demás. De hecho, ocurrió exactamente lo contrario, hasta el punto de que Cataluña, Euzkadi, Madrid y Valencia principalmente, absorbieron recursos financieros, naturales y demográficos desde sus zonas circundantes y aun otras lejanas, de tal modo que *hoy concentran cerca de la mitad de la población española en menos de la séptima parte de su territorio.*

La ideología del desarrollismo de los llamados tecnócratas intentaba un doble juego, y durante un cierto tiempo logró algún éxito. Por un lado, constituía un instrumento de legitimación del sistema, ante el alejamiento paulatino de su tradicional base nacional-católica. Las nuevas circunstancias del mundo occidental, por otro lado, le permitían jugar con las apetencias de consumo, apaciguando así otro tipo de expectativas, en particular las de orden público, y evitando o desviando los consiguientes conflictos. En definitiva, se procuraba que, elevando algo el nivel de vida de masas considerables de población, se ocultaran los inmensos beneficios de una minoría, que de hecho acrecentaban la desigualdad. Pero sobre todo, se aplicaba en la práctica la filosofía de «hay que mejorarlos a ellos, los de abajo, para evitar que aspiren a suplantarnos a nosotros».

El desarrollismo, pues, se orientó para favorecer preferentemente los intereses de una determinada clase social, y a zonas geográficamente limitadas del territorio, a costa del resto. Este les cedió sus recursos en un proceso que hasta casi finales de los setenta prosiguió sin modificaciones. Por ejemplo, Madrid y su provincia crecieron en esos veinte años a una tasa, calculada en moneda constante, prácticamente doble que la de Extremadura, a pesar de que además Madrid aumentaba rápidamente su población, mientras Extremadura la perdía.

De aquí que entre 1960 y 1975 se incrementasen las desigualdades entre los niveles de vida medios de una y otras regiones o nacionalidades, a la vez que las necesidades de infraestructura de las grandes concentraciones urbanas eran atendidas muy preferentemente sobre cualesquiera otras. Tales desigualdades se repetían —y se mantienen aún— a escala incluso intraprovincial, como ocurre por ejemplo en la costa sur, con una franja litoral de extraordinario desarrollo y a la vez comarcas a pocos kilómetros en el in-

terior con rentas medias e índices socio-económicos diez o quince veces más bajos.

Sólo a mediados de los cincuenta se había conseguido recuperar el nivel de vida de veinte años atrás. Por entonces, estimaciones en torno al volumen de clases medias lo situaban en poco más de un tercio de la población total. Es a partir de 1960 cuando se va a acelerar extraordinariamente el ritmo del cambio social y, por tanto, la demanda de nuevas ocupaciones y actividades que acrecientan rápidamente la clase media nueva.

Todavía a comienzos de los cincuenta, prácticamente la mitad de la población activa se dedicaba a la agricultura. Treinta y cuatro años después, la mitad de la población activa se encuentra ya en el sector terciario. Como se ha comentado tantas veces, *el cambio ocurrido en el conjunto del país en los últimos veinticinco años supera en magnitud al del pasado siglo y medio, por lo menos.*

Desde el comienzo mismo del régimen franquista se había producido un considerable desfase entre la estructura política formal y la sociedad, desfase que se acentuó en particular con la aceleración del cambio a que me refiero. La fachada del sistema estaba cada vez más lejana de la sociedad civil a la que decía representar y a la que de hecho suplantaba.

La creciente influencia norteamericana en la política española, y su penetración en el mundo comercial y financiero del país, acarreó también una modificación en los enfoques de los mecanismos de producción, utilizando sobre todo a los tecnócratas como instrumentos de esa actuación. Se pasó así, por decirlo en pocas palabras, de un capitalismo brutal a otro algo más sutil.

De este modo se entreabrió la puerta a vientos exteriores, y al surgir un mercado que dejaba de ser autárquico, se introdujeron nuevas técnicas e intereses, y en definitiva se inició un camino hacia la inserción de nuevos valores en la cultura del país. Se empezó de este modo a orear el mefítico ambiente cerrado durante largos años por el ultranacionalismo y la reacción franquista, que no pudieron en lo sucesivo contener la influencia del exterior.

Particularmente fue sensible a estos aires la nueva generación, en la que fracasaron estrepitosamente los intentos del régimen por mantener, a través de todos los medios de socialización, una ideología propicia a sus periclitados valores intolerantes. La misma Iglesia inició un suave, pero firme apartamiento del poder político formal, resultado de su secular experiencia ante regímenes en decadencia. Por su parte, la Universidad, otro eficaz mecanismo de socialización, comenzó a convertirse en plataforma contestataria, con una repercusión exterior muy superior a su auténtica fuerza. Desde casi

todos los sectores de la estructura comenzaba a avivarse el conflicto, hasta entonces soterrado.

Sin embargo, subsistían los componentes básicos del sistema político. Con algunas nuevas cooptaciones, quienes detentaban los poderes económico y político seguían siendo los mismos que siempre. Mucho de ellos ni siquiera se molestaban en disimular o moderar sus expresiones y su práctica de la intolerancia y la injusticia. Prueba de ello es que, si bien se elevaron algo los niveles de vida —como en todo el mundo occidental— según el Informe FOESSA 1983, en el intervalo «desarrollista» 1964-74 empeoró la distribución personal y funcional de la renta en el conjunto del país, quedando en 1974 en situación muy inferior relativamente a la de diez años atrás (1). Y ello por una simple razón, que en dicho Informe también se hace explícita: porque los frutos del crecimiento fueron a parar en proporción mayor al estrato más alto de la sociedad, tal y como estaba previsto. Y, al mismo tiempo, el sector más pobre de la sociedad española se encontraba, en términos absolutos, casi en el mismo nivel que en la década anterior.

Subsistía igualmente en el medio rural de gran parte de España una estructura de la propiedad que poco había cambiado en los últimos siglos. Según el censo agrario de 1972, se deducían desigualdades tan manifiestas —sobre todo en el Sur, Extremadura y Galicia— como el hecho de que en Andalucía, la mitad de la superficie agrícola total perteneciera todavía a sólo el 1,2 por 100 de las explotaciones. A la vez, la mitad de éstas abarcaba únicamente el 3,1 por 100 de la superficie.

En cuanto a las élites burocrática y financiera, en el otro extremo de la pirámide social, seguían reforzando su poder, constituyendo la cúspide de la economía española. Así, tan sólo 51 individuos o familias controlaban por entonces casi la mitad de los Consejos de Administración de las grandes empresas del país. Esta élite ejercía una fuerte influencia y casi controlaba la actuación de la superestructura política, en la que se encontraba profundamente imbricada. Consecuencia de todo ello era, que, según una fuente tan poco sospechosa como la ya fenecida *Revista Sindical de Estadística*, a comienzos de los setenta el 1,2 por 100 de los hogares disponía del 22,4 por 100 de la renta nacional.

Desde el punto de vista geográfico sucedía lo de siempre: datos de Banesto demostraban que mientras en Madrid 83 de cada 100 habitantes vivían en municipios de alta renta media, sólo el 1,2 por 100 de la población andaluza (en Marbella, concretamente), se encontraba en situación simi-

(1) F. MURILLO y M. BELTRÁN, «Estructura social y desigualdad en España», en el IV Informe FOESSA, Madrid, 1983.

lar. Verdad es que no *toda* la población gozaba de altos ingresos en el primer caso, o bajos en el segundo, puesto que se trata de un promedio. Pero no es menos cierto que el centralismo facilitaba medios a una mucho mayor proporción de sus habitantes, a costa de otros, en las regiones empobrecidas. Todo lo más, había en ellas algunas mejores *apariencias*.

La introducción de algunos servicios públicos en las localidades rurales, el uso generalizado de radio y televisión, la mayor frecuencia de viajes, la desaparición en buena parte del tradicional aislamiento rural, y la disminución del analfabetismo, confirieron a nuestro medio rural una apariencia que cabe calificar de «desarrollo cosmético», o alternativamente de «modernización sin desarrollo».

El contraste entre la apaciguadora ideología desarrollista y el hecho de que la clase dominante siguiera siendo la misma, con independencia de su ubicación, resultaba tan evidente que tal ideología fue perdiendo fuerza legítimadora, trasluciéndose en los años finales del régimen una inquietud que oscilaba entre el conflicto moderado y la violencia abierta. Esta última utilizada preferentemente desde la intransigencia de las posiciones de poder.

Ahora bien, la imparable penetración del capital extranjero convergía en sus intereses con los de un importante sector del capital español, como en tantos otros países. La introducción de compañías, productos y servicios especialmente de origen norteamericano, la internacionalización de la producción y de la distribución, y la poderosa presencia de las multinacionales, comenzaban a encontrar un obstáculo en la intolerante rigidez del régimen, sangrientamente manifestada hasta en sus últimos momentos. Una sociedad más moderna, controlada por esos intereses, requería sin duda una mayor flexibilidad política, imposible de obtener del franquismo. Constituía éste *un dique anacrónico no sólo ante las fuerzas progresistas, sino incluso ante las del capital modernizante*.

El tardío fin del régimen —fuese provocado, o cayese por su peso, o ambas cosas— inició una nueva etapa en nuestra historia, en la que hoy nos encontramos de lleno. Desde comienzos de la presente década se vienen manifestando fenómenos sociales, culturales y políticos que difícilmente eran previsibles muy pocos años atrás. Han quedado inéditas en su casi totalidad las perspectivas, objeto de largos comentarios eruditos, que preveían una sociedad en los ochenta con muy elevados índices de consumo, abundante y opulenta, en que se dispondría de mucho más tiempo de ocio, con muy bajas tasas de desempleo, mucho más igualitaria, con refinados servicios públicos, etc. La realidad, muy diferente, demuestra una vez más nuestra escasa capacidad profética. Como siempre, postdecimos, no predecimos.

Actualmente, subsisten entre otras muchas, las diferencias rural-urbanas, que hasta cierto punto se han incrementado, al concentrarse en las ciudades mayores proporciones que nunca de los sectores más pudientes de la población. A ello contribuyen factores diversos, como la mayor comodidad y acceso a servicios, especializaciones del empleo, educación de los hijos, y similares. La estructura de la propiedad rural, por su parte, se ha modificado muy poco, y en cuanto al desempleo está replanteando en algunas zonas —rurales o industriales— problemas que hace sólo diez años parecían cosa del pasado remoto.

Son identificables todavía bolsas de pobreza y comarcas muy deprimidas, con deficientes servicios públicos e ínfimos ingresos, como por ejemplo ocurre con un cuarto de millón de habitantes sólo en la provincia de Granada. Las cinco provincias más ricas y las cinco más pobres en el ranking nacional siguen siendo casi las mismas que hace treinta años, especialmente las últimas. El elevado número de estudiantes universitarios, relativamente superior ya al de algunos países occidentales, y que produce la saturación de los recursos y aun del espacio físico en algunos centros, a más de un alto paro de licenciados, contrasta agudamente con el hecho de que todavía la población mayor de catorce años presenta por término medio niveles muy bajos de educación, con un 83 por 100 que declara solamente «estudios primarios» o «menos». Los índices de analfabetismo en Jaén, aún hoy son superiores al 15 por 100.

No obstante, en los últimos años parecen haberse reducido las diferencias entre las rentas personales. Las encuestas del INE indican que a comienzos de la década, la decila con más alto nivel de renta acumulaba ya sólo el 25 por 100 aproximadamente de ésta, quedando la más baja más o menos en un 2,5 por 100, es decir, con una décima parte de los ingresos de aquélla en su conjunto, lo que implica una notable disminución respecto a la «distancia» entre ambas de hace solo diez años. Justo es señalar que en el País Vasco y Rioja la primera decila ofrecía los más altos ingresos de todo el territorio español, y a la vez la menor diferencia con la última, mientras que en Aragón tal desigualdad era la mayor del Estado.

Pese a estar ya en pleno funcionamiento los poderes y derechos específicos de las comunidades autónomas, ni existe ni en ningún futuro previsible existirá nada remotamente paralelo a ellos, a nivel de adopción real de decisiones económicas en el campo privado. Es decir, habrá un nuevo desfase entre el flamante poder político de las regiones o nacionalidades, y la realidad económico-financiera, que dispondrá de sus fondos, sus inversiones, sus recursos y sus productos como más le convenga. Por citar un solo ejemplo, recientemente se ha calculado que las tres cuartas partes de los empleados

de grandes empresas de Andalucía dependían de decisiones adoptadas en Madrid, por lógico que en nuestro sistema comercial ello sea (2).

En definitiva, *subsisten en España fuertes diferencias de renta, empleo y educación*, que sitúan aproximadamente a la mitad de nuestra población —especialmente en el medio rural— en lo que en general se acostumbra a denominar clase trabajadora, siendo ella la que soporta el principal peso del desempleo. Así pues, la desigualdad se mantiene en muchos aspectos relevantes, aun cuando en los últimos años han surgido algunas lentas perspectivas para su disminución, incluso bajo las adversas circunstancias de la crisis económica.

Y, ¿hasta qué punto pervive la intolerancia? Los datos de encuesta existentes desde mediados de los sesenta señalan que permanece estable —en menos del 10 por 100 de los entrevistados— el número de quienes se manifiestan con abiertas actitudes autoritarias e intolerantes. Cabría pensar que al menos desde entonces no eran ya muchos los que compartían la ideología del sistema, a cuyas espaldas estaban decantándose crecientes actitudes democráticas. Ello contribuiría a explicar la madurez de que ha dado muestras el pueblo español, dotándose sin traumas de los complejos mecanismos de un Estado de Derecho.

Pero no podemos entonar un canto triunfal al fin de la intolerancia en España. Ciertamente, se han suavizado algunas de sus expresiones, en particular en el ámbito de la convivencia de corrientes y opiniones políticas radicalmente distintas de las propias, cosa de la que al fin y al cabo ya teníamos algunos precedentes. Pero subsisten, más o menos disimuladas, múltiples variedades de intolerancia que sería preciso comprobar, analizar y exponer a la luz pública. Esto contribuiría no sólo a nuestra necesaria y mutua comprensión, sino también a su eventual desaparición. Voy a exponer brevemente algunas, puesto que no pretendo realizar un catálogo exhaustivo de ellas.

No pocas veces se observa en la actualidad, que bajo apariencias de carácter supuestamente «moral» —con frecuentes connotaciones políticas— se rechazan de plano comportamientos, opiniones, e incluso ejercicio de derechos, que una mayoría del pueblo acepta para sí o para beneficio de otros. Era precisamente a este sector, a quienes se refería Unamuno cuando decía que «el grosero tradicionalismo español, apenas tiene nada de cristiano».

Opera en relación con esto igualmente la profunda quiebra entre generaciones que ha sido característica de la cultura española en las tres últimas dé-

(2) J. CAZORLA, «Dependencia empresarial, nivel de industrialización y algunas actitudes de élites económicas en Andalucía», en *Rev. Esp. de Investigaciones Sociológicas*, núm. 26, CIS, 1984.

cadadas. Aunque, como dije antes, no me corresponde entrar en tal temática aquí, no puedo por menos de subrayar hasta qué punto los procesos de socialización de los jóvenes actuales y los de la generación que les precede han sido totalmente distintos, tanto por causa del régimen político que actuó sobre éstos, como del rápido cambio social al que los jóvenes naturalmente se han adaptado.

Dicho sea de paso, no toda tolerancia es aceptable en sí, por el simple hecho de parecerlo. Sin entrar en consideraciones de filosofía política, resulta que son precisamente los más conservadores quienes más tolerantes se muestran ante ciertos problemas que afectan gravemente a la comunidad, como los de la destrucción de la naturaleza o la proliferación armamentista. En cambio, los más progresistas y los más jóvenes suelen ser quienes más rígidos se manifiestan en estas cuestiones, precisamente por situar el interés general por encima del de los individuos. *La verdadera tolerancia es la que busca la erradicación de las causas de los problemas sociales, no aceptando el limitarse a paliar solo sus consecuencias, que es la clásica actitud conservadora.*

Otra expresión actual de la intolerancia se manifiesta en la problemática autonómica, que es preciso mencionar. Desde la puesta en marcha del Estado de las Autonomías, se viene articulando una red de complejas tensiones y delicados balances de fuerzas en las relaciones centro-periferia, que rápidamente ha tenido que montarse a partir de una situación política radicalmente opuesta, y, por tanto, con multiplicada dificultad. A veces se aprecian rasgos de incomprensión e incluso intolerancia en quienes —quizá con frecuencia por razones personales— pretenden mantener viejos privilegios del centralismo. Y otro tanto ocurre por el lado de los que llevan su rigidez ultranacionalista al extremo de usar la violencia física repetidamente, llegando a la máxima expresión de intolerancia que es el derramamiento de sangre. Con ello desprecian los cauces de convivencia pacífica, diálogo y aun presión, hoy existentes.

En este mismo sentido, resulta tan lamentable como sorprendente la mutua incomprensión que todavía subsiste entre regiones o nacionalidades del Estado, y la pervivencia de estereotipos que atribuyen cualidades poco gratas —y por lo demás falsas— a los extragrupos. Y ello es tanto más extraño en un tiempo como el nuestro, en que los medios de masas y la educación generalizada nos deben hacer conocer suficientemente bien a aquellos otros pueblos que comparten con nosotros el suelo común. Resulta así inevitable que de la incomunicación nazca una intolerancia que deriva en apelativos insultantes para los inmigrantes o «los otros», e incluso en variedades de presión que no siempre respetan sus derechos inalienables. Desde luego, se echa de

menos una acción eficaz de las autoridades educativas y culturales del país, que conduzca a un mayor conocimiento de la historia, la cultura y las peculiaridades de cada uno de nuestros pueblos, utilizando los numerosos instrumentos de que para ello disponen.

Una variedad de esta incompreensión, que a su vez degenera en desprecio, rechazo y autojustificación, es la que, con un contenido en cierto modo darwinista, se manifiesta hacia las regiones, comarcas o clases más pobres, a las que se les supone tales «porque —se dice— no han sido capaces de desarrollarse por su propio esfuerzo», y otros argumentos similares. Es decir, se atribuye a *todos* los habitantes de aquella zona o miembros de aquella clase lo que ha sido básicamente responsabilidad de sólo algunos, en concreto los tenedores del poder y/o de la riqueza, como la historia nos demuestra. Dicho de otro modo: además de haber sido explotados, se les desdeña justo por ser pobres.

En este ámbito subsisten aún actitudes abiertamente discriminatorias frente a algunas minorías étnicas, señaladamente los gitanos, en modo alguno distintas de las que suelen atribuirse a otros países para con sus propias minorías, y en la actualidad sin el pretexto siquiera de su nomadismo o su miseria que en muchos casos ya han superado.

El egoísta comportamiento de algunos miembros de ciertas actividades, funciones públicas o privadas, o cuerpos, contribuye poderosamente a obstaculizar la apertura de vías igualitarias y de convivencia común. Demasiadas veces estamos comprobando cómo la buena voluntad de las personas se ve también contrarrestada por la inercia de las instituciones.

La experiencia cotidiana y los estudios sociológicos de estos últimos años muestran, en fin, que hemos superado algunas variedades de intolerancia religiosa y política, pero no todas, ni hemos avanzado mucho en otros ámbitos, como algunos de los que he mencionado.

La supervivencia de numerosas formas de desigualdad e intolerancia en la sociedad española actual, no sólo origina sus correspondientes consecuencias conflictivas, sino que unida a un factor psicológico relativamente reciente, puede hasta cierto punto multiplicarlas. Me refiero al *extendido y creciente papel de las expectativas*, fruto a su vez de la mentalidad de clases, de los incentivos publicitarios al consumo, y de los estímulos y promesas propagandísticas de los políticos en ejercicio.

Como antes he señalado, es claro que el nivel de vida de la gran mayoría de los españoles se ha venido elevando, a veces de forma abrupta, como en la duplicación de salarios que en el industria y servicios se produjo entre 1975 y 1980, lo que contribuyó parcialmente a los actuales problemas económicos. Pero no es menos cierto que los casi veinte millones de miembros

de la clase trabajadora, perciben hoy más agudamente que nunca las diferencias que les separan de los más favorecidos. Y por tanto, no sólo no adoptan ya una actitud fatalista-resignada, sino que plantean sus reivindicaciones con carácter a menudo perentorio.

La multiplicidad de demandas que llueve sobre el sistema político, desde éste y otros orígenes, el rápido cambio social, los obstáculos y situaciones resultantes de la crisis económica, y la fragilidad o insuficiente experiencia de algunas instituciones, se ven así desbordados y parecen incapaces de proporcionar las oportunas respuestas satisfactorias ante ese aluvión de presiones. Por citar un solo ejemplo, los mismos partidos políticos, base de todo sistema democrático, se ven obligados a actuar con improvisación, en forma zigzagueante, adquieren compromisos contradictorios, van a remolque del cambio, no adoptan una vía clara de actuación, y con frecuencia sufren disrupciones internas definitivas, como en nuestra historia reciente hemos presenciado. Otras instituciones, solo lentamente y a veces casi de mala gana, se adaptan a las exigencias de la situación actual, produciéndose en todos los casos, en suma, frustraciones y deterioros colectivos que tarde o temprano desembocan en formas de conflicto.

Las expectativas operan no sólo frente al sistema político, sino también frente al social. Y las diferencias e intolerancias antes mencionadas contrastan fuertemente con las aspiraciones personales y las enfáticas proclamaciones de igualdad, haciendo surgir en consecuencia otras variedades conflictuales, entre las que destacan los problemas de inseguridad ciudadana, resultantes no pocas veces de la proliferación del desempleo.

Un elemento sociopolítico surgido a partir de 1982, contribuye a hacer más compleja la situación. Me refiero a que *por primera vez* —con un cortísimo precedente en la II República— *no coinciden en nuestro país los incumbentes del poder político con los del poder económico*. Los grandes intereses representados por las élites burocrático-financieras, no poseen en este momento los instrumentos directos de gobierno de los que durante siglos han disfrutado. Es evidente que su capacidad de presión sobre un gobierno socialista es extraordinaria, pero no la superposición de ambos poderes indudablemente también constituye un factor de fricción, cuya importancia sería inútil ignorar. Tal vez haya sido el destino, el que ha hecho que en las grandes crisis económicas de nuestra historia —1868, 1931, 1977— se haya abierto el poder a los progresistas, con el resultado de su rápido desgaste.

Una gran parte de los españoles tiene plena conciencia de todas estas circunstancias y de que aún falta mucho por andar, antes de que nuestra sociedad se democratice más y pierda algunos de los factores que mayor conflictividad producen. Así, por ejemplo, en el citado Informe FOESSA, un

84 por 100 de los respondientes (en 1981), veían al Estado como «gran aparato manejado por unos pocos», lo que dejaba en mal lugar a los estímulos «desde arriba» para aumentar su necesaria participación. Este alto porcentaje de entrevistados se veían a sí mismo «por debajo de la línea de los que están arriba», es decir, que no contaba para nada, y lo sabía. Lo cual coincidía en definitiva con la opinión, sostenida por más de la mitad, de que aquí vivimos en una sociedad «caracterizada por la lucha de clases» (3).

Pero lo que resulta indudable, y tal vez sea lo más importante de nuestra sociedad actual, es el hecho de que *la pervivencia y renovación de los conflictos, quizá también por primera vez, han encontrado un cauce general, y sobre todo pacífico, para su resolución*. Solo excepcionalmente se contempla entre nosotros a quienes personifican intereses opuestos como enemigos, sino más bien como adversarios. Por tanto, la relación entre ellos se produce mediante una negociación institucionalizada. De aquí que pueda aventurarse que, por primera vez en mucho tiempo, *el sistema político ha llegado a ponerse más o menos a la altura de la dinámica del sistema social, y el instrumento decisivo para ello ha sido la voluntad del pueblo*.

En el seno de un Estado de Derecho, cuyas bases constitucionales no han sido ya impuestas por un bando hegemónico a los demás, hemos alcanzado al fin un grado de racionalidad jurídicamente expresada, que se impone y es superior a toda autoridad y voluntad políticas, individuales o corporativas. Es más, cabría decir que *esa regulación institucionalizada de los conflictos, que los mantiene en un plano de no violencia, constituye condición indispensable para la existencia de una estructura social estable*.

Otra cosa muy diferente sería la utópica suposición de que en un futuro previsible, con la eventual abundancia económica, se reducirán necesariamente los conflictos y se consolidará una paz permanente. Como ya señalaron algunos sociólogos a finales del pasado siglo, el conflicto es ínsito a la estructura social y a la profunda adscripción de diversos grupos a diferentes conjuntos de valores. Por esta razón, ninguna actividad concreta, incluida la económica, será capaz de suprimirlo definitivamente. Lo que sí cabe, y en ese trance nos encontramos, es prevenir y moderar los conflictos a través de la adecuada regulación de las funciones y las actividades sociales. Y para ello, como ha señalado Julien Freund, *la política, una política en libertad, debería desempeñar el papel de crear las condiciones de desarrollo de cada ser y cada actividad según sus preferencias, sus gustos y sus convicciones* (4).

(3) Informe FOESSA, cit., pág. 94.

(4) J. FREUND, *Sociologie du conflit*, PUF, París, 1983.